

San Bernardo, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

**VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:**

**I.- ANTECEDENTES DEL CASO.**

**1°. Personas intervinientes en el juicio.**

Compareció **MIGUEL ALEJANDRO MUÑOZ GAVILÁN**, empleado, domiciliado en Condominio Puesta del Sol N° 26, comuna de Lampa, Santiago y dedujo una demanda por despido injustificado en procedimiento de aplicación general, contra **VAPOR INDUSTRIAL SPA.**, sociedad comercial representada por CRISTIAN MEYER LOZANO, gerente, ambos domiciliados en Avenida La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago.

**2°. Síntesis de la demanda.**

MIGUEL ALEJANDRO MUÑOZ GAVILÁN trabajó para la demandada desde el 1° de junio de 2016 en funciones de “Product Manager” en labores desarrolladas en dependencias de la demandada ubicadas en Avenida La Divisa N° 01100, San Bernardo, Santiago, con contrato de trabajo indefinido.

Su remuneración era de \$2.645.529.-

Fue despedido el 29 de abril de 2021 por causal de necesidades de la empresa del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

Transcribe la carta de despido:

“En efecto, dado la crítica situación financiera por la cual atraviesa nuestra empresa, comprometida, ente otras razones, por el delicado estado de la economía de nuestro país, cuyas razones son de público conocimiento, nos ha obligado a adoptar drásticas medidas que nos ha obligado a disminuir personal, prescindiendo de los servicios de muchos trabajadores, sin poder reemplazarlos, debiendo acudir a aquellos de la misma área, quienes han asumido las funciones y obligaciones de los trabajadores desvinculados. El difícil trance financiero de la empresa nos exige aplicar medidas para revertir esta situación, optimizando recursos, reorganizando nuestras operaciones, efectuando una racionalización interna del área donde usted trabaja entre otras, eliminando cargos, redefiniéndolos y fusionando funciones, dentro de los cuales se encuentran el que usted desempeñaba hasta la fecha. En síntesis, todos los despidos que sean venido llevando a cabo forzosamente tuvieron por causa las necesidades de la empresa, derivadas de la ineludible racionalización del personal, servicios y operaciones, como se señaló precedentemente, que se manifiesta por la alarmante caída de las utilidades de la empresa, como se demostrará en la oportunidad procesal correspondiente” [sic].

La carta de despido ofreció el total de \$15.754.968.- compuesta de \$2.645.529.- por indemnización sustitutiva de aviso previo y \$13.227.647.- por indemnización por años de servicios, descontando \$2.328.903.- del aporte del empleador al seguro de cesantía (aporte AFC).



El firmó 13 de mayo de 2021 finiquito con reserva de derechos por el despido injustificado y el descuento del aporte de AFC.

Acusa que la carta de aviso es insuficiente para informar adecuadamente y conforme a los estándares legales, la procedencia de la causal invocada.

Con todo, alega que le agregaron la función de “ventas y representación de productos” que cumplió en buena forma, incluso en pandemia, según le informó el empleador. Agrega que todos los demás trabajadores vieron un aumento de remuneraciones, excepto él, pese a las ofertas del gerente general. Señala que había otros trabajadores con menos de un año de servicio y que no fueron despedidos.

Pide que se declare el despido injustificado, se ordene la devolución del aporte del empleador a AFC y se condena a la demandada al pago de:

1. Recargo 30% de la indemnización por años de servicio: \$3.968.294.-
2. Devolución aporte empleador AFC \$2.328.903.-
3. Reajustes, intereses y costas.

### **3º. Síntesis de la contestación de la demanda.**

La demandada contestó la demanda pidiendo su rechazo, con costas.

Reconoció la existencia de relación laboral, remuneración, fecha de inicio, función, lugar de trabajo, fecha de término, causal invocada y monto del descuento de AFC.

Alega que la carta de despido cumple con los estándares legales.

Señala los siguientes argumentos sobre la situación de la empresa y la procedencia de la causal:

“mi representada se encontraba, a raíz de la crítica situación financiera por la cual atraviesa, comprometida, entre otras razones, por el delicado estado de la economía de nuestro país, cuyas razones son de público conocimiento, debiendo adoptar drásticas medidas obligándola a disminuir personal, prescindiendo de los servicios de muchos trabajadores, sin poder ser reemplazados, debiendo acudir a aquellos de la misma área, quienes han asumido las funciones y obligaciones de los trabajadores desvinculados.

El difícil trance financiero de la empresa exigió aplicar medidas para revertir la desfavorable situación, optimizando recursos, reorganizando operaciones, efectuando una racionalización interna del área donde trabajaba el actor, entre otras, eliminando cargos, redefiniéndolos y fusionando funciones, dentro de los cuales se encuentra el que desempeñaba hasta la fecha (...)

Según se explicó en la carta de despido, esto se debió a la necesidad de reducir costos en atención a crítica situación financiera, por los hechos acontecidos, desde marzo de 2020, pues este proceso ha desencadenado una serie de consecuencias perjudiciales para con los negocios de nuestro país, produciéndose así una fuerte y drástica disminución de la actividad económica, lo que se tradujo, por una parte, en que las funciones que se encontraba desempeñando el actor serían asumidas y absorbidas por otros cargos” [sic].

Alega que la causal fue correctamente aplicada porque la empleadora ejecutó un proceso de reestructuración, reorganización y racionalización y, además, cumplió las formalidades legales del término de la relación laboral.



#### **4°. Audiencia preparatoria.**

En audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación, no alcanzándose tal resultado.

Se fijaron los siguientes hechos no controvertidos:

1. Existencia de relación laboral entre las partes, la que se inició con fecha 1° de junio de 2016.
2. Que el actor prestaba los servicios de Product Manager para la demandada.
3. Que la remuneración del actor ascendía a \$2.645.529.-
4. Que el término de relación laboral se produjo por despido, con fecha 29 de abril de 2021, invocando la demandada la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, cumpliendo con las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo, en cuanto a la existencia y comunicación de la carta de despido.
5. Que el aporte de la demandada al seguro de cesantía del actor fue la suma de \$2.328.903.-, suma que fue descontada de las indemnizaciones del actor.

Se estableció el siguiente hecho a probar:

1. Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido del actor, y si estos configuran la causal invocada.

#### **5°. Prueba de la demandada.**

Para acreditar los hechos en que basa sus peticiones, la demandada ha rendido la siguiente prueba:

##### **I. Documental (folio 30 y siguientes):**

1. Contrato de trabajo de fecha 1 de noviembre de 2016.
2. Carta de aviso de fecha 29 de abril de 2021
3. Set de 9 finiquitos suscritos por trabajadores de la empresa entre por distintas causales:
  - a. Carlos Villar Orellana por causal 159 N° 4.
  - b. Horacio Zapata Malatesta causal 159 N°4.
  - c. José Herrera Vásquez causal 159 N° 1.
  - d. Manuel Hermosilla Ayala causal 159 N°4.
  - e. Marcos Pacheco Soto causal 161 inc 1°.
  - f. Mauricio Cid Herrera causal 159 N° 4.
  - g. Miguel Alvarez Echeverry causal 159 N°4.
  - h. Miguel Toledo Silva causal 161 inc 1°.
  - i. Roger Jaico Tello causal 159 N° 4.



## **II. Testimonial.**

1. PATRICIO CASTRO ORTEGA, ingeniero en proyectos industriales, domiciliado en La Divisa 1100, San Bernardo.
2. RAMÓN ISMAEL CARRASCO ENCINA, ingeniero civil mecánico, domiciliado en Avenida San José María Escrivá de Balaguer 9447, Vitacura.
3. KAREN SLIGHT WENZEL, psicóloga, domiciliada en La Divisa 0110, San Bernardo.

## **III. Oficios.**

1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO, ubicada en calle Agustinas N° 1230, Piso 3 Al 10, Comuna De Santiago, para que informe cantidad de despido informados por la empresa Vapor Industrial SpA, desde diciembre de 2020 a la fecha.
  - a. Oficio respuesta en folio 24.

## **6°. Prueba de la demandante.**

Por su parte la demandante ha rendido la siguiente prueba:

### **I. Documental:**

1. Carta de despido del actor.
2. Finiquito suscrito por las partes, con reserva de acciones.

## **II.- RAZONES DE HECHO Y DERECHO PARA RESOLVER EL CASO.**

### **7°. Desarrollo de la sentencia.**

Que, el artículo 454 N° 1 inciso segundo del Código del Trabajo dispone que en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.

No se discute que las formalidades de ejecución del despido fueron cumplidas.

Analizaremos el cuestionamiento al contenido de la carta aviso de término de contrato de trabajo y si se probó que concurrieron hechos constitutivos de la causal invocada.

Sólo en caso que se acoja la demanda, se tratará el tema del descuento del aporte del empleador a AFC.

### **8°. La causal de necesidades de la empresa no exige que la carta de despido**



**contenga una descripción detallada de los hechos.**

No se discute que se usó la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, necesidades de la empresa, la que no obliga a la exposición detallada de los hechos fundantes del despido, como en el caso de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Al efecto, basta con mencionar la causal y alguna de las razones que dispone la ley, las que luego deben ser debidamente acreditadas.

Esta afirmación se demuestra porque la redacción del artículo 162 del Código del Trabajo es clara. En el inciso primero se dispone que, si el despido se provoca por las causales contenidas en los números N° 4, 5 y 6, del artículo 159 y artículo 160 del Código del Trabajo, en la carta de aviso de despido se debe indicar – sólo en éstas hipótesis y por estas causales – los hechos en que se funda. A contrario sensu, no hay obligación legal de fundar con hechos la carta de despido, cuando el contrato de trabajo termina por aplicación de las causales contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 159 del Código del Trabajo y artículo 161 del mismo cuerpo legal, dado que estas causales en sí mismas son hechos.

Esto no controvierte al artículo 454 N° 1 inciso segundo del Código del Trabajo, porque esta norma solamente señala que “en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.” Así, siendo la causal un hecho en sí, se deben probar en juicio los hechos que ella expresa.

Por ejemplo, si la causal es fuerza mayor, se deberá probar ese hecho para que corresponda a una legítima terminación de relación laboral, lo mismo que en el caso del mutuo acuerdo. Para el caso de la renuncia voluntaria del trabajador, la ley ha establecido ciertas formalidades que resguardan la manifestación de voluntad del trabajador. Así las cosas, respecto a la causal de necesidades de la empresa, no es necesario fundamentar la causal invocada con más descripciones que las que contempla la misma ley, pues esta causal es un hecho en sí misma, que puede ser acreditado por cualquier medio legal.

La carta de despido ya fue transcrita al reseñar la demanda y es la misma que se lee en el documento 2 de la demandada y documento 1 de la demandante. Señala las hipótesis de reorganización de operaciones y racionalización interna, fusionando funciones, todo a causa de la “crítica situación financiera” de la empresa. Analizaremos si la demandada probó concurrencia de hechos que constituyan la causal.

**9°. Prueba de la causal de despido.**

La demandada no trajo prueba alguna que dé cuenta, con mínima solidez, del hecho de haber ejecutado necesariamente un proceso de reorganización y racionalización. Tampoco



trajo prueba alguna que demuestre que atravesó o atraviesa una “crítica situación financiera”. Referirse a la situación macroeconómica del país no es fundamento suficiente, pues algunos rubros se vieron más afectados que otros, en diferentes etapas y con diversas consecuencias, e incluso algunos tuvieron un alza en sus cifras.

Se intentó probar la baja de ingresos de la empresa por medio de la declaración de RAMÓN CARRASCO ENCINA, gerente de operaciones de la demandada, sin más respaldo probatorio. Para tener por acreditado un hecho de esa envergadura se requieren medios más contundentes y fiables que la declaración de un testigo dependiente de la empresa, sin más respaldo que su propia palabra. En cuanto a la redistribución de funciones, opera la misma lógica para concluir que estamos ante falta de prueba.

La ejecución de una racionalización de la cantidad de personas que trabajan en una organización productiva, debe ser acreditada por los medios idóneos. No tenemos, por ejemplo, el contrato de trabajo del trabajador testigo PATRICIO CASTRO ORTEGA que permita corroborar que reemplazó las funciones del demandante –como declaró el testigo en estrados– sobre todo teniendo presente que ese cambio debe constar por escrito, pues la escrituración de las modificaciones de funciones es una obligación legal (artículo 10 Código del Trabajo).

Una reorganización, una baja en las ventas o una merma en la actividad de la empresa requieren una prueba más sólida que la sola declaración de testigos que, como en el caso de la testigo KAREN SLIGHT, quien incluso pertenece a otra empresa que presta servicios a la demandada. La testigo SLIGHT trabaja en recursos humanos y declaró que otra área se hace cargo de las escrituraciones de contratos de trabajo y, por tanto, no tiene certeza si se hizo la escrituración para adaptar a las nuevas funciones.

El solo listado de trabajadores “desvinculados” y sus documentos –documental N°3 de la demandada- no permite sino tener por probado que esas relaciones laborales terminaron, pero no sabemos por qué y si fue ajustado a derecho. Es más, de los nueve finiquitos acompañados, solamente dos son por causal de necesidades de la empresa. Otro tanto pasa con la prueba del oficio de la Dirección del Trabajo (folio 24) que sólo permite probar que determinada cantidad de trabajadores dejó la empresa, pero nada más.

La conclusión es que la causal no ha sido acreditada. Por tanto, la demanda será acogida, declarando el despido injustificado y ordenando el pago del recargo de 30% de la indemnización por años de servicio, conforme al artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

Se hace presente que las sumas pagadas por concepto de indemnización por años de servicio y el monto de aporte del empleador a la cuenta de AFC no están discutidas, y son los que aparecen en la demanda (además de confirmarse con el finiquito acompañado como documento 2 de la demandante).



### **10°. Devolución AFC.**

La imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía que aportó el empleador, descontándola de la indemnización por años de servicio, está establecida en el artículo 13 de la Ley N°19.728, como un efecto del despido por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

Por tanto, si es un despido que se declara injustificado, no se satisface la condición porque, en rigor, no estamos ante despido por causal del artículo 161 inciso primero dado que no tuvo por fundamento una de las causales que prevé la ley.

Una interpretación contraria significaría establecer un incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza del empleador, en que la ejecución de un despido injustificado beneficiaría a quien lo practica, otorgando eficacia a un acto declarado judicialmente contra derecho.

Podemos agregar que el objetivo del inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728 es favorecer al empleador en problemas económicos que ejecuta un despido por necesidades de la empresa que se ajusta a derecho. Como prerrogativa debe ser considerada como una excepción y, por lo tanto, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva.

En consecuencia, se acogerá la petición de ordenar la devolución del aporte del empleador a AFC que fue descontado de la indemnización por años de servicio, en el monto señalado en la convención probatoria.

### **11°. Resumen.**

La demanda será acogida porque no se acreditó que efectivamente concurrió la causal de necesidades de la empresa. La prueba rendida se apreció conforme a la sana crítica y la no reseñada en nada modifica lo resuelto.

### **III.- RESOLUCIÓN DEL CASO.**

Por las consideraciones precedentes y visto lo dispuesto en los artículos, 1, 7, 160, 162, 168, 172, 184, 420, 425 y siguientes, 445, 446 y siguientes, 453, 454, 455, 456, 459 y siguientes del Código del Trabajo, ley 16.744 artículo 1.698 del Código Civil, **SE RESUELVE:**

- I. Que, se acoge la demanda en todas sus partes, se declara el despido injustificado y se condena a la demandada al pago de:
  - a. Recargo 30% de la indemnización por años de servicio: \$3.968.294.-
  - b. Devolución aporte empleador AFC: \$2.328.903.-
- II. Que las sumas ordenadas pagar deberán reajustarse y aplicárseles el interés correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 173 del





Código del Trabajo.

- III. Que, se condena en costas a la demandada, regulándose las costas personales en \$500.000.- (quinientos mil pesos).

Regístrese, notifíquese.

Regístrese y notifíquese.

**RIT O-238-2021**

**RUC 21- 4-0336342-9**

Dictada por Sebastián Bueno Santibáñez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

